



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta Nro. 34

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandantes: FABIO LEÓN LÓPEZ GONZÁLEZ
Demandados: COLPENSIONES y OTROS.
Procedencia: JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Radicado No.: 05001-31-05-009-2019-00585-01 (20-163)

En Medellín, a los doce (12) días del mes de marzo dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como Magistrado Sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de sentencia, procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, dentro del proceso ordinario instaurado por **FABIO LEÓN LÓPEZ GONZÁLEZ** en contra de **COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A.**, en el proceso con radicado Nro. 05001-31-05-009-2019-00585-01 (20-163).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

Mediante vocera judicial la litigiosa por activa **FABIO LEÓN LÓPEZ GONZÁLEZ** pretende la ineficacia y/o nulidad del traslado de régimen pensional, el traslado de las cotizaciones realizadas, la reactivación de la afiliación en Colpensiones, y las costas procesales, y de manera subsidiaria, solicita que se condene a PROTECCIÓN S.A. a reconocer a título de indemnización de perjuicios como mesada pensional, el valor equivalente a lo que este hubiese recibido si estuviera en el régimen de prima media, con fundamento en que venía afiliado al extinto Instituto de los Seguros Sociales desde el 23 de enero de 1985 y que posteriormente en marzo de 1999 se trasladó a PROTECCIÓN S.A. y luego se trasladó a COLFONDOS S.A. el 24 de junio de 2002, para posteriormente retornar en el mes de octubre de 2007 a PROTECCIÓN S.A.; que se presentó falta u omisión del deber de

información a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., previo a su afiliación y traslado. Finalmente, relata que el 15 de mayo de 2019 solicitó a COLPENSIONES el retorno al régimen de prima media con prestación definida, pero recibió respuesta denegatoria el 16 de mayo de la misma anualidad.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 09 de octubre de 2019 (Fol. 53), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

El extremo pasivo de la relación procesal COLPENSIONES contestó la demanda el 13 de diciembre de 2019 (Fol. 147 a 161), oponiéndose a las pretensiones formuladas en consideración a que la afiliación del demandante a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. está revestida de la presunción de legalidad, y la parte actora no ha acreditado los presupuestos fácticos necesarios para la ineficacia y/o nulidad del acto jurídico por medio del cual se dio el traslado, aunado a que COLPENSIONES no tuvo injerencia en ninguna actuación desplegada por PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A.. Como excepciones de mérito propuso las que denominó improcedencia de la declaración de la ineficacia y/o nulidad del traslado de régimen realizado por el demandante, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación de Colpensiones de reconocer la pensión de vejez al actor por encontrarse afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, improcedencia de reconocimiento sin descuentos en salud, improcedencia de la indexación a cargo de Colpensiones, indexación a cargo de la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad, devolución de cuotas de administración, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la innominada o genérica.

En lo tocante a COLFONDOS S.A., esta contestó la demanda el 27 de enero de 2020 (Fol. 174), allanándose a las pretensiones de la demanda, y reparando no ser condenada en costas procesales.

Por su parte, PROTECCIÓN S.A. contestó la demanda el 11 de diciembre de 2019 (Fols. 79 a 99), oponiéndose a las pretensiones impetradas, en razón a que el acto de afiliación es existente, válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo, firmándose el formulario de afiliación de forma libre y espontánea, constituyéndose en un verdadero convenio; que el actor tuvo suficiente ilustración para que optara por el traslado, desvirtuándose cualquier vicio en el consentimiento, y además

de encontrarse inmerso en la prohibición legal para trasladarse. Propuso como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, falta de juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal, y la innominada o genérica.

A través de Autos del 30 de enero de 2020 (Fol. 175), se tuvo por contestada la demanda de parte de las codemandadas.

1.1.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 30 de octubre de 2020, con la que el cognoscente de instancia declaró la ineficacia de la afiliación realizada a PROTECCIÓN S.A. y la que posteriormente se realizó a COLFONDOS S.A., al tiempo de condenar a PROTECCIÓN S.A., a devolver los aportes incluidos los rendimientos financieros, sin que haya lugar a deducir de los mismos, los gastos de administración, primas de aseguramiento y porcentaje destinados a la garantía de pensión mínima; así mismo, ordenó a COLFONDOS S.A. que devuelva los valores que dedujo de los aportes entre julio de 2002 al mes de septiembre de 2007, por concepto de gastos de administración, prima de re-aseguramiento y garantía de pensión mínima con destino a COLPENSIONES, al igual que a esta última, a recibir tales conceptos y activar la afiliación sin solución de continuidad, gravando en costas solo a PROTECCIÓN S.A.

1.2 APELACIÓN

PROTECCIÓN S.A.: Depreca que no debe ordenarse la devolución de cuotas de administración y los seguros previsionales, ya que tales conceptos son autorizados por la ley y opera en ambos regímenes; que los aportes fueron debidamente administrados, obteniendo rendimientos; que sí el efecto de la ineficacia del traslado es que las cosas vuelvan a su estado anterior, solo debe ordenarse la devolución de los aportes sin los rendimientos financieros, ya que estos no se causan en el régimen de prima media con prestación definida; que no hay lugar a devolver lo descontado para el seguro previsional, dado que tales descuentos se dirigieron a la aseguradora, la cual es un tercero de buena

fe, y PROTECCIÓN S.A. se encuentra imposibilitada para recobrar tales partidas y devolverlas a COLPENSIONES.

La apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. en los alegatos de conclusión manifiesta que no procede en este caso concreto la devolución de la comisión de administración y lo descontado para financiar las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes así mismo, como el valor correspondiente al seguro previsional.

COLFONDOS S.A.: Asevera que debe revocarse la orden impartida a COLFONDOS S.A., en los relativo a los gastos de administración, descuentos para el fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, en razón a que los descuentos realizados a las cotizaciones no fueron arbitrarios, sino que se efectuaron en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, además de que dichos valores ya no se encuentran en poder de COLFONDOS S.A., sino de terceros de buena fe, que no fueron vinculados al proceso, desconociéndoles su derecho de defensa y contradicción, y no ser objeto de fijación del litigio. Así mismo, que debe tenerse en cuenta que el actor durante su permanencia en COLFONDOS S.A. ha estado cubierto para los riesgos de invalidez y sobrevivencia, y seguirá cubierto hasta la ejecutoria de la sentencia.

El apoderado judicial de COLFONDOS S.A. aportó alegatos de conclusión en los que refiere revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de absolver a Colfondos S.A del traslado de los dineros correspondientes a los descuentos por gastos de administración y los descuentos del fondo de garantía mínima.

CONSULTA:

Se surte igualmente el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, por haber sido adversa la sentencia de primera instancia a sus intereses.

La apoderada judicial de COLPENSIONES en la oportunidad de alegar de conclusión manifiesta que, en caso de confirmarse la ineficacia del traslado de la parte actora al RAIS, se confirme lo decidido por el juez de primera instancia, es decir, no solo la devolución de los aportes con sus rendimientos, frutos e intereses, sino también las cuotas de administración en su integridad, primas de aseguramiento y porcentajes destinados a garantía de la pensión mínima, debidamente indexadas, así como la exoneración de las costas del proceso.

A su turno, la apoderada judicial de FABIO LEÓN LÓPEZ GONZÁLEZ aportó oportunamente alegatos de conclusión en los que refiere confirmar la sentencia que fue proferida en primera instancia.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las apoderados judiciales de PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, así como también se revisará la sentencia en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1 PROBLEMA JURÍDICO:

El *thema decidendi* en la presente Litis se circunscribe en definir: ¿Si operó la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen efectuado por el demandante a la AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad convidada a juicio?, y de ser así ¿Cuáles son los efectos jurídicos que devienen de la ineficacia del traslado?

2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será CONFIRMATORIO, prohijando la tesis de que no se brindó la asesoría cualificada que pregona el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la par de prever todas las consecuencias que conlleva la devolución de las cotizaciones, esto es, que se debe incluir también las sumas que se descontaron para el fondo de garantía de pensión mínima, gastos o comisión de administración y sumas adicionales de la aseguradora durante el tiempo de afiliación a cada una de las AFP, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1 INEFICACIA DEL TRASLADO DEL RPM AL RAIS

En lo que interesa a la Litis, no es objeto de discusión los siguientes hechos: que el actor venía afiliado al régimen de prima media con prestación definida desde el 23 de enero de 1985 (fol. 18); que se trasladó a PROTECCIÓN S.A. el 01 de marzo de 1999 (fol. 111); que posteriormente el 24 de junio de 2002 se trasladó a COLFONDOS S.A. (Fol. 112), y regresó nuevamente a PROTECCIÓN S.A. el 26 de septiembre de 2007 (Fol. 112); que el 14 de junio de 2019 PROTECCIÓN S.A. en respuesta a una solicitud le informa al actor

que: *“respecto a la asesoría que se realizó al momento del traslado de régimen, en donde se le explicaron los beneficios, el comparativo de ventajas y desventajas, cálculos y proyecciones, le informamos que no contamos con el archivo físico ya que este tipo de asesorías se realizaban verbalmente y de manera personal en la oficina de servicio”* (Fol. 38), y finalmente, que el 15 de mayo de 2019 solicitó a Colpensiones el traslado de régimen, obteniendo respuesta negativa por cuanto el traslado fue realizado ejerciendo el derecho a la libre elección de régimen (Fols. 46 y 47).

Para resolver de fondo la Litis, esta Colegiatura viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia No 31989 del 9 de septiembre hasta la sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, línea jurisprudencial que constituye el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación como la constatación iterativa del cumplimiento del deber de información; que el formulario de afiliación es insuficiente, requiriéndose probar el consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor del afiliado, y que el alcance de la jurisprudencia citada, es aplicable a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiario del régimen de transición, o esté próximo o no a pensionarse, precedente jurisprudencial replicado a través de la sentencia STL3196 del 18 de marzo de 2020, en la cual la Alta Corporación asuntó que desconocer tal precedente es constitutivo de una vía de hecho, aunado a que con tal providencia abandonó la postura atinente a que se entendía como argumento razonable la negativa del traslado por no ser beneficiario del régimen de transición o que al no estar inmerso en tal prerrogativa la carga de la prueba le compete al afiliado y no a la AFP.

En esa misma dirección, preciso es ponderar por la Sala que para la fecha del traslado inicial en el año 1999, la AFP tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que a voces de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1688 de 2019, consiste en dar: *“Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*.

Conforme los anteriores lineamientos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación inicial, solo se allegó por parte de la AFP el correspondiente formulario de afiliación, y otra documental posterior al traslado (Fols. 111 a 146); empero, tales probanzas no reflejan que de manera documentada se haya presentado la asesoría

cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, y que no solo son los beneficios de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, mismas que no fueron explicitadas previo al momento de efectuarse el traslado, mucho más si en el proceso por el que se procede la entidad convidada al juicio enfila su defensa en que no contaba con soporte documental para la fecha del traslado por cuanto la información se brindaba de manera verbal, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegar un formato de vinculación cumpliendo los requisitos que impone la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que se requiere de la asesoría integral brindada al momento del traslado, indicando las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, con la advertencia de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima, debía efectuarse aportes voluntarios superiores a las deducciones de ley por cotizaciones, habida cuenta de que no solo se trata de disuadir al afiliado con llamativos rendimientos financieros, sino que pueda lograr en lo futuro una pensión que mejor se acompase con la densidad cotizacional alcanzada en toda su vida laboral.

Ahora, si bien el litigioso por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que no fue coaccionado al momento de estampar su firma en el formulario de afiliación, no puede pasar de soslayo la Sala que el deber de información no se satisface con solo allegar al juicio el formulario de afiliación suscrito, sino con la evidencia real de que lo allí plasmado correspondiera a la realidad y atendiera a una decisión libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, pues por el contrario, el actor dio cuenta que la asesoría brindada fue fugaz, superficial y fragmentaria, asegurándole únicamente que obtendría una mejor pensión y antes de la edad exigida en el régimen de prima media con prestación definida, además de haberse realizado en el lugar de trabajo de manera grupal junto a otros compañeros.

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad en la que se hizo la afiliación inicial, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el asesor(a) que atendió al litigioso por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial afiliado, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y con notas de generalidad realizadas por la parte activa en desarrollo del

interrogatorio de parte, ni relevantes las referidas a la condición académica o nivel de instrucción del reclamante, como tampoco que no haya realizado indagaciones por su cuenta sobre su situación pensional ante las AFP accionadas o externamente a éstas.

En este punto, cabe resaltar lo adocinado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras sentencias, en la de radicado No. 31989 del 09 de septiembre de 2008, en la que expresó: “**la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen**”, por la simple razón de que la declaración de ineficacia de traslado trae consigo el que las cosas vuelvan a su estado anterior, y por lo tanto, una nueva afiliación al interior del RAIS no convalida la actuación viciada de traslado, tal como acontece en el sub examine, pues aunque el actor se trasladó entre AFP del RAIS, de tal acto no puede predicarse la convalidación de la ineficacia del traslado de régimen pensional por falta del deber de información en que incurrió la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1999, al paso de que ni siquiera en el traslado al interior del mismo RAIS se evidencia soporte documental acreditativo de haberse suministrado información clara, completa y comprensible al potencial afiliado, mucho menos cálculos comparativos de la mesada pensional en ambos regímenes, toda vez que como lo manifestó el actor, el traslado realizado entre AFP del RAIS se materializó solo con la firma del formulario, sin recibir ninguna clase de información en esa calenda.

En lo concerniente al saneamiento de la nulidad relativa, la Corte en sentencia SL1688 de 2019 ha adocinado que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del *status quo*, indicando que: “*a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos*”.

Así las cosas, el traslado ulterior efectuado por el actor dentro del RAIS, en modo alguno convalida la ineficacia del traslado de régimen pensional, así como tampoco opera el saneamiento de la nulidad relativa.

2.2.2 TRASLADO DE LAS COTIZACIONES.

A este respecto, huelga precisar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, puesto que precisamente así lo ha pregonado la jurisprudencia del

máximo tribunal de esta jurisdicción, en especial en la sentencia con radicado 31898 de 2008, reiterada en las sentencias SL4989 de 2018 y SL 1429 de 2019, al igual que el deber de ser recibidas las cotizaciones por COLPENSIONES, por la simple y llana razón de que esta entidad administra el régimen de prima media con prestación definida, a donde se encontraba afiliado el demandante antes del traslado de régimen, habida cuenta que de los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado no puede desligarse a COLPENSIONES, so pretexto de que al ser un tercero está imposibilitado de recibir al actor.

En orden de abundar en razones viene a propósito resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia al explicar los efectos jurídicos de la ineficacia del traslado de régimen, al tiempo de puntualizar qué conceptos debe devolver las AFP del RAIS a COLPENSIONES, de las que se trasunta las siguientes:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional. (SL2877-2020)

A este respecto, conviene relieves que en los eventos en que se presenta traslados entre las AFP del RAIS, la condena enderezada a la devolución debe extenderse a todas las AFP en donde estuvo afiliado el demandante, pues la última AFP donde está afiliado eventualmente no cuenta con lo descontando por los conceptos de gastos o comisión de administración, garantía de pensión mínima y sumas adicionales de la aseguradora por parte de la AFP anterior donde se encontraba afiliado, y por ello, lo procedente es que en el evento de que en dicha cuenta de ahorro individual no aparezcan tales partidas por el tiempo en que el actor estuvo afiliado, la condena también proceda contra la AFP antecesora del régimen de ahorro individual para que traslade a COLPENSIONES los valores que hubieran descontado o deducido de las cotizaciones del afiliado durante su permanencia (**SL2877-2020**), máxime cuando ni siquiera en los traslados entre las AFP del RAIS se logra extraer que se haya cumplido con la proyección y suministro de los cálculos comparativos que permitan mensurar el futuro pensional del afiliado, aparejado con una detallada información y explicación de todas las variables que influyen en la obtención de una mayor mesada pensional, más allá de cautivar al afiliado con posibles rendimientos financieros, que finalmente no resultan tan determinantes para alcanzar tal cometido.

Precisamente en la sentencia SL 2877-2020 se instruye que los efectos de la ineficacia, *mutatis mutandi*, cobijan a todas las entidades donde estuvo afiliado el demandante, así no hayan participado del acto de afiliación y traslado de régimen pensional.

Consecuente con lo anterior, la sala advierte que la condena ordenada por el a quo, engloba todos los conceptos aquí individuados, y en ese orden, lo procedente es confirmar la sentencia de primer grado, siendo que tal condena también la hizo extender a COLFONDOS S.A.

Finalmente, esta Sala considera que hay lugar al traslado integral de las cotizaciones a COLPENSIONES, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema sino también la efectividad del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*, lo cual determina la desestimatoria de la apelación propuesta por la vocería judicial de PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., por demás que no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones. Y finalmente, sobre el concepto de la Superintendencia Financiera, cumple precisar que tal acto estimatorio o postural no es de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales, por demás que sobre este aspecto, la Sala se aviene al precedente jurisprudencial que en derredor del

tema ha construido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como se dejó sentado ampliamente en líneas anteriores.

2.2.2 EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, esta Sala, ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia connotan la devolución de las aportaciones de manera integral, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele, como así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL361, radicación 63615 del 13 de febrero de 2019.

De lo que viene dicho, para la Sala se impone la confirmación de la sentencia de primer grado en lo relativo a la ineficacia del traslado de régimen pensional, bajo los parámetros atrás reseñados.

COSTAS

En segunda instancia no se impondrá condena en costas a COLPENSIONES, pues la sentencia se revisó en el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

Frente a las AFP accionadas y apelantes, solo se impondrá condena en costas en esta instancia a cargo de cada una de las AFP accionadas, PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., fijándose como agencias en derecho la suma de \$ 908.526 correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente a cargo de cada una y a favor de la parte demandante, por no haber prosperado los recursos de apelación impetrados. Las de primera instancia se confirman.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO.: CONFIRMAR la sentencia apelada y consultada proferida el 30 de octubre de 2020 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.


SEGUNDO: CONDENAR en **COSTAS** en esta instancia fijándose como agencias en derecho en favor del demandante y a cargo de cada una de las AFP accionadas, PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., el equivalente a un (1) SMMLV, esto es, la suma de \$ 908.526. Frente a COLPENSIONES no se imponen por no haberse causado. Las de primera se confirman.


Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARIÓ LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial

Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.


Secretario Sala Laboral

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 45** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 15 de marzo de 2021, y pueden consultarse en <https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario